¿Hacia una sociabilidad urbana en el campo mexicano? Reflexiones a partir de la desunión de producción y consumo*

Marielle Pepin Lehalleur

EL ELEMENTO PRIVILEGIADO y diríase “natural” de las demandas campesinas ante los poderes públicos en México es y ha sido el de la producción: se han solicitado créditos y mejores precios, mayor autonomía productiva o comercial en ciertos casos, y más apoyo y protección en otros; algunos, como jornaleros, han exigido salarios y condiciones de trabajo decentes; más que nada, se ha luchado por la tierra (Bartra, 1977; Astorga, 1985; Cartón, 1986; Relio, 1986; Rubio, 1987, etc.).

Hasta ahora, era poco frecuente que se movilizaran los campesinos —sino en muy pequeños grupos— por conseguir agua potable, atención médica o escolar, y era más excepcional aún que esas luchas encontraran eco en la prensa nacional, en la opinión pública, en la acción oficial... y en los trabajos académicos (Canabal, 1988; Carbajal, 1988; CEA, 1989). Tal parece que todos, incluido el propio campesino, concordaban en considerarlo como un mal productor, carente de recursos, o sea, de algún modo, problemático, y que de este estatus de productor con dificultades se derivan todos los aspectos de su vida y su posición en la sociedad.

La cuestión del *consumo* campesino no ha suscitado tanto interés. De hecho, hay varias razones importantes para no desligar

* Las ideas principales de este artículo fueron presentadas en el coloquio sobre “Movimientos sociales en el campo” organizado por Sergio Sarmiento en Jalapa (IIS-UNAM-UV) en octubre de 1990. Agradezco a Kirsten Appendini, Sara Lara y Vanía Salles sus comentarios y sugerencias bibliográficas.

consumo y producción campesinos, lo mismo en el quehacer diario que en el plano reivindicativo.

En la práctica, y para cualquier categoría social, el nivel de consumo está en función amplia de los ingresos y varía en consonancia con ellos aunque, cuando ocurren estos cambios, no sólo el nivel de consumo sino la naturaleza de lo consumido tienden a modificarse, lo cual indica que intervienen otros factores. Pero, en esencia, obtener tierra, vender a mejor precio, recibir salarios más altos permite normalmente comer, vestir y vivir mejor.

Reivindicar lo primero y no lo segundo establece distinciones en varios planos: marca los límites entre la responsabilidad del Estado y la de los agentes económicos (los campesinos y sus familias); deslinda una esfera pública y otra privada; atribuye legitimidad a algunas demandas y las niega *de facto* a otras, presumiendo que las primeras son susceptibles de respuesta positiva, no así las segundas, lo que, finalmente, supone cierto juicio implícito sobre la organización de la sociedad, la posición de los demandantes en ella y el papel del Estado en la distribución del producto social.

Los campesinos parecían seguir este razonamiento cuando circunscribían sus luchas a la producción. ¿Por qué amplían ahora sus demandas al ámbito del consumo?

Todo observador de la vida campesina se ha percatado de la dificultad de distinguir entre producción y consumo en presupuestos familiares, contabilidad de tiempo de trabajo, distribución de tareas o motivaciones económicas. La mejor manera de dar cuenta de la dinámica a corto y largo plazo de las unidades domésticas es recurrir a un modelo interactivo en el que ambas variables se determinan mutuamente. El modelo tiene sus límites,¹ pero es indudable que muchas familias campesinas producen en su parcela fuera de todo cálculo de rentabilidad, tan sólo porque esto añade algún ingreso a lo que se reúne trabajando en otras actividades. O sea, que las necesidades de consumo y reproducción se imponen global-

¹ Si se pretende darle fuerza de ley. Su autor, Chayanov (1966), plantea que condiciones más favorables inducirán a la unidad doméstica a reducir su actividad para mantener estable su nivel de "fatiga" (relación entre esfuerzo desarrollado y satisfacción obtenida). De hecho se observa con frecuencia este comportamiento *una vez alcanzado el umbral deseado de bienestar*, entre individuos y en unidades productivas que buscan la satisfacción de sus necesidades y no una forzosa maximización de la ganancia. Así sucede que jornaleros pagados a destajo, en trabajos donde se puede lograr una buena remuneración diaria, escojan ir un día sí y otro no, según su necesidad y la rentabilidad que calculan para la próxima jornada (por ejemplo, en función del aspecto de la cosecha que les tocará levantar).

mente sobre el cálculo económico de corto alcance (Pepin Lehalleur y Rendón, 1983).

Acorde con esta imbricación y el necesario ahorro de recursos externos, parece propio del "modo de vida campesino" que las familias, preferentemente las madres, se hagan cargo de la mayor parte de las tareas: atender la salud y el aprendizaje, y no únicamente lavar sino acarrear el agua, no sólo cocinar sino desgranar el maíz de la cosecha, preparar el nixtamal y moler, en fin, hacer en casa y por sí mismas lo más que se pueda.

Difícil hacerlo de otro modo cuando no existe equipamiento ni servicios, así que debe considerarse que esta organización responde no sólo al peculiar ordenamiento de medios y fines que rige la sociedad campesina sino también a una situación de hecho. En este entrelazamiento de actividades donde se confunden las prioridades de la producción y del consumo, ¿cuál puede ser el espacio de intervención del Estado?

Si los campesinos han mostrado poco empeño en reclamar servicios, las instancias oficiales se han preocupado menos en proporcionárselos, a pesar de que los programas gubernamentales, contradictoriamente, siempre suman sus fuerzas a las del mercado para romper el círculo del autoconsumo.

Pero las necesidades de los campesinos han ido evolucionando y las solicitudes de tierra se han transformado en demandas de apoyo en el proceso directo de la producción (y en la valorización), además de que ahora desarrollan esfuerzos crecientes de organización en busca de mayores satisfactores de consumo.

Del lado gubernamental, se habla hoy en día de "17 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, en su mayor parte habitantes del campo". Las instancias oficiales, a la vez que afirman su voluntad de desligarse de las cuestiones productivas, muestran una marcada preferencia por atender deficiencias habitacionales o escolares; las necesidades "urbanas" dejan de limitarse a las ciudades y se manifiesta una voluntad política de tratar a los habitantes de las áreas rurales como consumidores más que como productores.

Es notable la convergencia de estos procesos. Cabe interrogarse sobre el sentido histórico y político que tiene su doble inflexión y tratar de formular hipótesis acerca de las formas de sociabilidad y de mediación política más susceptibles de imponerse en la trama social del campo a partir de lo que aparece ahora en filigrana.

**La proyección del modelo urbano en el campo:
una vieja historia con visos nuevos**

En México, hace tiempo que perdió vigencia la imagen —de por sí dudosa— del campesino aislado e ignorante de la vida urbana: desde la Revolución, al menos para la inmensa mayoría de la población rural. En esa época, los hechos armados impusieron múltiples desplazamientos individuales o colectivos, a los que sucedió la búsqueda de nuevas oportunidades económicas en un contexto desigual, transformado según las regiones. La implementación de la reforma agraria permitió el regreso al campo de parte de los pobladores de las pequeñas ciudades provincianas y enmarcó a todos los campesinos en una red cada vez más intrincada de relaciones institucionales, personales y sociales que los involucraba y los supeditaba a la sociedad urbana. Aunque sólo fuera a través de esta vía indirecta, pocos son los que no tuvieron desde entonces alguna experiencia de la ciudad, sus ritmos y sus exigencias.

El éxodo rural iniciado en los años sesenta que ha ido generando un movimiento de personas, dinero e ideas, las imágenes atractivas difundidas por una televisión que le sigue el paso a la electrificación en el campo, el ímpetu que cobran las migraciones hacia los Estados Unidos en el último decenio contribuyen poderosamente a difundir entre el campesinado un conocimiento concreto y preciso de los modelos urbanos de bienestar y a valorar el disfrute de una mayor autonomía personal de cara a diversas posibilidades de empleo, de relaciones y otras formas de realización que se antojan múltiples. A la vez reales y engañosas, brillan las luces de la ciudad.²

Paralelamente, de manera menos espectacular, los campesinos aprenden a tratar con gente de la ciudad en sus propios ámbitos. Es el mundo del trabajo golondrino para los más pobres, los que del cañaveral al campo aldonero, de la plantación de café o de naranjos a la parcela de tomate deben atravesar las ciudades, saltar del tren al camión, encontrar su camino, procurarse comida y alojamiento entre el bullicio comercial de los centros urbanos y todavía lograr el enganche y el pago de su colecta (Astorga, 1985). Estos esfuerzos los realiza una multitud de trabajadores (se señalan alrededor de 4.5 millones) en forma prácticamente individual,

² Existen muchísimos estudios sobre migración campo-ciudad, aunque muy pocos sobre la difusión de modelos económicos o ideológicos en el campo, sin o antes de migrar (Roberts, 1980; López, 1986; González L., 1988; Havet ed., 1988).

ya que no emergen aún con fuerza las organizaciones susceptibles de transformar en compromiso social las experiencias acumuladas de explotación, las vejaciones, las habilidades adquiridas en el trabajo y el conocimiento de las rutas y de las contrataciones.

En el mundo más profesional, altamente institucionalizado y jerarquizado que se ha ido edificando en los tres sexenios anteriores para orientar y controlar la producción agrícola y los productores, los campesinos han tenido que vérselas con los técnicos, banqueros, vendedores de insumos, bodegueros, concesionarios de maquinaria y funcionarios de todo tipo, de los que han aprendido mucho de sus conocimientos y de sus mañas y corruptelas. Aquí, el proceso de integración ideológica es progresivo, complejo, cuando no contradictorio.

La relación con gentes ajenas en un trato disparate genera frustración, esfuerzos por salirse del atolladero o la convicción de que las cosas sólo empeorarán. También da cabida a desear una vida material más cómoda, a conformar una conciencia avivada de orgullo profesional, a tener aspiraciones de mayor intercambio cultural y exigir la calidad en la enseñanza escolar.

Aunque son muchos los campesinos que expresan satisfacciones por lo que ha sido su vida, no parecen dudar de que dedicarse a otra cosa ofrece mejores oportunidades. La proyección para el futuro de los hijos radica en la valorización de lo que fue para uno dura experiencia, para otro fértil aprendizaje y, cuando se ha tenido suerte, inicio de un ascenso económico. Existe la creencia de que si se puede lograr una mejoría, será en la ciudad (o en su periferia, que es donde encuentran asiento los campesinos) más que en el pueblo. Pero se está difundiendo la esperanza y la exigencia de que los beneficios de la vida urbana se disfruten también en el campo, que allí se pueda vivir con más comodidades, que los hijos reciban mejor formación, y quizá, sin decirlo, que se deje de ser una categoría aparte y sea reconocido como partícipe en igualdad de condiciones de la sociedad nacional.

La producción campesina entre dos exigencias

La integración de la economía de las unidades campesinas en los circuitos comerciales es historia vieja. Se puede decir que se remonta, bajo otras formas, a los tiempos coloniales (Dehouve, 1990) y, más cerca de nosotros, la reforma agraria se hizo, quiérase o no, bajo este supuesto. Pero un proceso reciente, que se podría fechar en

los dos últimos decenios, es la considerable expansión de la cobertura crediticia y técnica en las zonas y a los productores que habían quedado excluidos del conjunto de acciones oficiales de apoyo a la “revolución verde”, aunque sus productos, como los demás, circulaban y se valoraban en la red mercantil.³

Con este giro en la acción oficial, se dio un paso más en la transformación desde adentro de la “racionalidad” campesina, si con este término hablamos de una organización de los esfuerzos domésticos que privilegia la adecuación de los recursos entre sí sobre la rentabilidad de la operación, y que busca ajustar los resultados a las necesidades acordes con el tamaño de la familia. (Ciertamente que para lograr estos propósitos habría que disponer de recursos flexibles y suficientes en cantidad y calidad; pocas veces es el caso, lo cual pone a la economía campesina en dificultades tanto en sus propios términos como frente a la competencia mercantil.)

La inversión pública de los sexenios pasados en la agricultura tenía, entre otros fines, proporcionar a las unidades agrícolas un suplemento de medios económicos con que mejorar su eficacia, medida con el rasero del mercado.

Pero la introducción de insumos financieros e industriales en la producción campesina obliga a hacer una serie de ajustes que pueden ser —pero no siempre son—, provechosos. Si descontamos los casos en que una parte del crédito se desvía hacia gastos de consumo, y tiende a inflarlos, su uso económico implica recortar el trabajo familiar, elegir los productos que se sembrarán para asegurar el reembolso de los préstamos más que la alimentación, seguir pautas técnicas que entrañan dependencia y, finalmente, vender a los precios vigentes al tiempo de la cosecha para respetar los plazos estipulados por el banco.

En aparatos económicos estructurados para lograr equilibrios internos —como son las unidades domésticas—, la intromisión de los instrumentos capitalistas no puede generar flexibilidad y adecuación al mercado si no es al precio de un profundo trastocamien-

³ De 1960 a 1969, la inversión pública en la agricultura absorbe 10% de la inversión total, y de 15 a 17% de 1970 a 1982 (Heath, 1988). El crédito ofrecido por el conjunto del sector bancario a la agricultura pasa, en pesos constantes, de 67 000 millones promedio anual en 1973-1975 a 92 500 millones en 1976-1982 y vuelve a bajar a 74 000 millones en 1983-1986 (Calva, 1988, cuadro 13). Finalmente, de 1983 a 1987, los subsidios y transferencias del presupuesto público hacia el sector disminuyen 62% en términos reales. Los subsidios implícitos en las tasas preferenciales de crédito para productores pequeños y medianos pasan de 50 y 36% en 1982 a 23% en 1987 (Escalante y Rendón, 1988, cuadros 6 y 7).

to de las relaciones económicas y sociales entre sus componentes. Esta "disfunción" inducida y las respuestas que genera pueden redundar en pésimos resultados o, al revés, incrementar el bienestar de las familias. Dependiendo de su disponibilidad de recursos, entre otras circunstancias, se "dinamizan" o tienden a desagregarse más rápidamente como unidades de producción. La transformación no ha sido equilibrada, de una región a otra, de un ejido a otro, de familia a familia.

Muchos productores que Schejtman (CEPAL, 1982) describiría como "estacionarios", "excedentarios" y "transicionales" han entrado de lleno en este proceso. No se puede distinguir en las estadísticas su comportamiento reciente, pero diversas entrevistas y evidencias indirectas, confrontadas con un análisis fundado en datos parciales (Rodríguez, 1983a),⁴ sobre su evolución como grupo, de 1970 a 1980, muestran que, en la medida de sus posibilidades, se lanzan a buscar las oportunidades que brindan el mercado y las volteretas de la política crediticia, y renuncian —por ser poco remunerados—, a los cultivos que son, o fueron, materia prima fundamental de su alimentación.

Estas familias pasan a ser parte de una "clase media" rural, por su nivel de ingresos, su forma de funcionar y sus expectativas de vida. Lograron una acumulación inicial de recursos, a través de procesos puramente privados o de las múltiples oportunidades de acáparamiento de tierra, maquinaria, crédito, que ofrece el sistema ejidal, pero requerirán, muchas veces, de inyecciones regulares de dinero; las aportan los hijos con salarios pagados en Estados Unidos o en la ciudad, o las obtienen en actividades conexas (trabajo de tractor a máquina, transporte de cosechas).

Estos agricultores manejan sus recursos calculando los riesgos en función de la posible ganancia (hay que contratar créditos onerosos para sembrar algodón, hortalizas o comprar equipo técnico), y están en condiciones de no intensificar el uso de un insumo —en particular trabajo— más allá del nivel en que sea económicamente redituable, en vez de invertir esfuerzos máximos en pos de pequeñas mejoras, como hacen sus vecinos más pobres.

⁴ Los resultados agregados permiten aventurar que el aumento de la producción de este estrato en tierras de riego (de 1970 a 1980) traduce un abandono relativo de los granos básicos a favor de los productos que tenían mayor dinamismo entonces: las oleaginosas, y más aún, probablemente, el sorgo y la soya (Rodríguez, 1983:135). También es de suponer que aportaron lo suyo al incremento relativo de las superficies dedicadas a las hortalizas, los frutales y las flores en detrimento de los granos que ha caracterizado los últimos años.

La Unión Nacional de Organizaciones Campesinas (Unorca), y otros organismos semejantes, representan a este estrato dinámico pero aún no consolidado de agricultores que siguen buscando en la acción colectiva, de cara a los poderes públicos, un puntal necesario para la expansión de sus proyectos productivos.⁵ Pero esperan prolongar y asegurar su ascenso económico al enviar a sus hijos a estudiar carreras técnicas o universitarias e invierten en cuanto pueden en negocios no agrícolas.

Dependiendo del clima sociocultural regional, gastan más o menos en construir una casa más cómoda (y ostentosa), en aportar equipamiento y servicios al pueblo o a la ciudad, en fomentar actividades recreativas, en tomar responsabilidades políticas directas: generosidad y dedicación bien entendidas que se apartan claramente, por su estilo, del control caciquil y se inscriben en las maneras urbanas de consolidar una posición social.

Las estrategias de reproducción de la mayoría de las familias campesinas buscan, en cambio, preservar un área de seguridad en su abastecimiento, supeditando estrechamente las decisiones productivas a esta necesidad. Las otras fuentes de ingreso se añaden a este núcleo central de la organización doméstica. Así es como muchos manejan el crédito, cuando tienen acceso a él: como un ingreso más que viene a completar y combinarse con los demás.

Después de que el campesino supera el temor de quedar "endrogado", el crédito entra a menudo a proporcionarle liquidez, cuando no supe simplemente las deficiencias estructurales de la unidad producción-consumo. A la vez, el productor se hace acreedor de una deuda naturalmente creciente y puede ser llevado a abandonar algunas prácticas conservadoras como sembrar maíz o frijol, almacenar una parte para el consumo familiar, modular la venta a lo largo del año para atemperar las fluctuaciones de precios, etcétera.

Cuando no se tiene una propiedad con que respaldarlo, el crédito se otorga a un grupo que se hace responsable en forma solidaria del pago. Este agrupamiento implica de por sí limitaciones a la capacidad del productor de tomar decisiones, lo más común, siendo que sólo se le comunica la suma global que debe pagar, sin co-

⁵ Estos productores acomodados participan a menudo en diferentes formas productivas asociativas (ejidos colectivos, "sectores" o sociedades de crédito) que han superado las dificultades propias de la organización colectiva (falta de responsabilidad y de control sobre las decisiones, riesgo de manipulación) y han sacado partido de sus ventajas: un aprovechamiento más rentable de los insumos, apoyo crediticio y fuerza comercial (Cebada, 1986; Gordillo, 1988).

nocer los detalles contables. Cuando la producción asume una forma colectiva, se siembra lo que recomienda el banco, y sólo la fuerza de trabajo de los jefes de unidad encuentra empleo pues los paquetes tecnológicos imponen la intensificación del capital mas no de la mano de obra disponible.

Esta aportación externa se torna entonces en un elemento portador de contradicciones para las unidades domésticas. Necesario en tanto no bastan sus propios medios para asegurar su sustento, el recurso del crédito, al que acuden casi siempre que se puede, les obliga a modificar sus metas y métodos, sin asegurar el resultado.

El manejo del riesgo es precisamente un punto clave de la producción y de la reproducción vital, que involucra a las familias en relaciones complejas. El crédito institucional no resuelve esta dificultad pero propone respuestas parciales al dar acceso al seguro agrícola, o a un seguro de vida para el productor y sobre todo, en forma opcional, al seguro social. Allí donde los servicios de salud están efectivamente al alcance, es una razón potente, primordial, para que los campesinos acepten comprometerse con una deuda (Pepin-Lehalleur, 1990).

De hecho, visto desde una perspectiva macrosocial, ayudar a un sector realmente mayoritario de la población a paliar con recursos públicos sus riesgos productivos y vitales podía haber fungido como un mecanismo principal en la ampliación de los beneficios del modelo "corporativo" de redistribución.

La adopción declarada de principios económicos opuestos, a partir de 1989, ha llevado a una reducción drástica de los fondos públicos destinados a la inversión agrícola y al control técnico. Ésta elimina las dificultades creadas por el intervencionismo pero deja intacto el problema básico de estrechez de recursos que afrontan las familias campesinas. Algunos intentan volver a esquemas de repliegue sobre un mínimo de insumos externos y un máximo de esfuerzo propio, produciendo y viviendo, como dicen, "de milagro". Otros alquilan sus tierras a algún vecino o a un empresario que, quizá, también empleará sus brazos. El trabajo asalariado, que unos encuentran a su puerta y otros van a buscar a cientos o miles de kilómetros, sigue siendo la solución más socorrida.

Multiplicación de vínculos laborales

Exodo rural, migración pendular, multicontratación familiar en labores agrícolas, trabajo domiciliario, empleo en industrias rurales

pueden sustituir totalmente a la producción o combinarse con ella. Cada uno de estos fenómenos es masivo y se desarrolla en escala creciente aunque resulta difícil, a veces imposible, de cuantificar.⁶

El trabajo y la organización doméstica para la reproducción ya no están supeditados a los requerimientos de una producción agrícola que se aleja cada vez más del modelo familiar y encuentra en el exterior sus insumos más importantes. En cambio, la estructura doméstica tiene que adaptarse al predominio de las formas salariales de obtención de recursos y contribuir a la producción material y a la socialización de una fuerza de trabajo susceptible de encontrar empleo en el mercado. Los reajustes que operan las familias afectan el desempeño de las tareas domésticas, los renglones del gasto y la valoración misma de los distintos modos —privados, colectivos o mediados por el mercado— de satisfacer sus necesidades de consumo.

Cuando uno depende del crédito o de los jornales ganados como peón para empezar a sembrar su parcela, cuando el dinero aportado por el hijo (o la hija) pesa más en el presupuesto familiar que el producto de la cosecha, cuando reditúa más salir a lavar ropa ajena y comprar tortillas que echarlas en el comal, cuando la presión social o la propia convicción llevan a mantener a los hijos en la escuela hasta el máximo grado posible en vez de requerir su ayuda, cuando se vuelve hábito y necesidad pagar por los servicios de un médico, por el agua potable, por la electricidad, los elementos del andamiaje económico familiar empiezan a distenderse y buscan un reacomodo.

Lo que ahora se impone como prioridad es una máxima disponibilidad de los recursos familiares, en particular de la fuerza de trabajo, que deben encontrar alguna forma de remuneración. Aparecen nuevas pautas en la distribución de las tareas dentro de la unidad doméstica, donde los papeles tradicionales de las mujeres de distintas edades van cambiando para dar a la que disponga de las condiciones más idóneas la posibilidad de salir a trabajar. Pueden ser muchachas jóvenes que se contratan como obreras, madres que cosen a domicilio para alguna empresa maquiladora o que van al campo de jornaleras mientras otras cuidan a sus hijos, señoras mayores que se dedican al mercadeo, etc. (Arias, 1988; Barrón, 1988;

⁶ El trabajo asalariado en la agricultura ocupaba 5 millones de personas en los años sesenta y setenta. El aumento de 500 000 personas que se reportan en la PEA del sector agropecuario en el censo de 1980 se localiza enteramente entre mujeres (Barrón, 1988).

Ceja, 1988; González M., 1988; Lara, 1988; Mummert, 1991.)

En los pueblos donde se instala la electricidad o que se dotan de agua, florecen nuevas actividades caseras como el comercio de bebidas frías, puestos de comida, salones de belleza y lo primero: se abre un molino de nixtamal. Algunos oficios implantados de antiguo se encuentran totalmente transformados por estas nuevas condiciones. Éste es el caso de muchos procesos artesanales que se fraccionan en etapas especializadas, distribuidas entre quienes poseen los hornos de gas, las sierras o los tornos eléctricos, los que tienen acceso fácil al transporte... y los que sólo tienen su conocimiento práctico y su capacidad de trabajo (Pietri, 1990; Gouy-Gilbert, 1990).

La integración al trabajo remunerado, con sus variadas expresiones locales y familiares, va evolucionando, además, de una cohorte a otra, incorporando a mujeres casadas según pautas que recuerdan los cambios que se observaban en la composición de las olas de migración campo-ciudad en los años sesenta y setenta.

En general, la presión que se ejerce sobre el trabajo de las mujeres no disminuye, aunque los servicios disponibles le ahorren esfuerzo y tiempo; esta liberación permite que su trabajo se invierta en otras actividades, asalariadas o por cuenta propia, y proporcione ingresos que sufragarán los nuevos gastos familiares en servicios y bienes de consumo adquiridos.

Ejemplo de la disponibilidad que se espera del trabajo femenino es la tendencia observada a que las mujeres asuman parte de las tareas —que no responsabilidades— masculinas, además de las propias, cuando se ausentan los hombres, y acumulen su carga inicial con la nueva si ellas mismas se emplean (dos versiones de la conocida doble jornada) (Guidi, 1988; Lara, 1991a).

En otras palabras, la introducción de servicios públicos en los pueblos y la generalización del trabajo fuera de la casa entre las mujeres no es necesariamente sinónimo de un alivio apreciable de trabajo ni de autonomía personal, como ha quedado ampliamente documentado en estudios sobre la condición de las mujeres pobres de la ciudad (González de la Rocha, 1986).

Relaciones familiares

Sin embargo, una nueva diversidad de modelos familiares emerge a partir de este cúmulo de cambios contextuales y de la redistribución de papeles en la unidad doméstica.

La meta común que proporcionaba sustento y coherencia a un

esquema jerarquizado de relaciones intrafamiliares se viene debilitando.

Anteriormente el trabajo que un padre acumulaba en beneficio del grupo familiar y de su patrimonio sustentaba su autoridad sobre sus hijos y todos los miembros de la casa, en una dinámica de intercambio diferido. Ahora, la obediencia y el trabajo con que los últimos responden a la aportación paterna abren a su vez una nueva cuenta a saldar por los que les sucederán, en un movimiento cíclico que asegura la perpetuación física y social del grupo. La deuda siempre renovada y el compromiso de reponerla ofrecen a todos los miembros de la unidad la seguridad de que se verán atendidos en sus necesidades, aun cuando no puedan aportar nada, ya sea por enfermedad, por ser muy jóvenes o demasiado viejos. De esta manera, la desigualdad intergeneracional organiza la solidaridad interna a la vez que da cauce a la hostilidad latente entre antecesores y herederos llamados a sustituir a los primeros en el ciclo reproductivo.⁷

Aunque se dan relaciones familiares fuertemente jerarquizadas en otros contextos y sin que exista un patrimonio que reproducir, una relación cuasi funcional parece unir ambos procesos en la sociedad campesina. O así la hace aparecer la ideología patriarcal.

El hecho de que los bienes de consumo sean producidos en el seno de la misma familia consolida este tipo de reproducción circular. La unidad aprovecha todas las energías disponibles, presionando a sus miembros con menor poder de decisión —las mujeres, los niños— para que aporten su contribución al esfuerzo productivo global sin obtener a cambio una cuota correspondiente de valoración social, o sea, obligándolos a que se pongan al *servicio* de los demás.

Por otro lado, la producción doméstica tiende a restringir su gasto a los bienes y servicios que la propia casa es capaz de generar. Cuando la explotación de los recursos familiares es el eje sobre el cual gira la organización del grupo, esta virtud ahorrativa y la elasticidad que procura una maximización del trabajo doméstico son paliativos que ayudan a afrontar los riesgos productivos.

Estas cualidades pierden vigencia al tiempo que se restringe la producción agrícola propia o que se desarrolla sobre bases comer-

El número 11 de la *Revue du Mauss*, y particularmente el artículo de Bloch y Buisson (1991) están dedicados a este tema y otros cercanos. También fue ilustrado por varias ponencias presentadas en la mesa redonda reunida en París (marzo 1990) sobre "Prestar y pedir prestado en el México del siglo XVI al XX. Las relaciones sociales vinculadas al crédito rural" (en proceso de publicación).

ciales, y que el trabajo de los jóvenes o el de las mujeres cobra mayor peso en el sostenimiento familiar.

Es una interdependencia multidireccional la que vincula ahora a los miembros del grupo, en la que los papeles ligados con la edad o el género no se asocian de manera necesaria o permanente a ciertas funciones económicas e ideológicas, y deben adaptarse a las circunstancias variables del mercado de trabajo.

Al sustituirse la solidaridad fundada en la devolución cíclica de trabajo, esta reorganización puede ser fuente de fragilidad frente a las rupturas en la vida de la familia (nacimientos, migraciones, muertes, despidos), o permitir acomodos más ágiles. Los recursos sociales que ayudan a proteger del riesgo tienden a ampliarse más allá de las redes comunitarias y articularse con los mecanismos institucionales que proporciona la sociedad (salud pública, empleo, bancos).

Las familias campesinas se ven así empujadas a adoptar comportamientos económicos que, al igual que en las demás categorías sociales, se guían por un cálculo probabilístico más que por las tradicionales operaciones de ajuste entre medios y fines limitados.

El consumo mediatizado por agentes externos

Vinculadas o no al mercado laboral, las formas del consumo familiar, de por sí, han variado. Las condiciones sociales de producción en que se desenvuelve el trabajo doméstico se han ido ampliando hasta abarcar regiones y ámbitos campesinos que se mantenían un tanto apartados. Este proceso, antiquísimo, sólo es un aspecto de la creciente presencia de la producción campesina en el mercado.

Hace decenios, las campesinas dejaron de hilar y tejer porque la ropa producida industrialmente costaba muchísimo menos y se adaptaba mejor a los nuevos usos y gustos. Ahora, se adquieren alimentos parcialmente transformados en los comercios, el gas sustituye a la leña, el *block* al adobe, el transporte en camión al burro o a la caminata, agua entubada a la noria y la luz eléctrica a los candiles. El consumo se impone a las preferencias familiares conforme se vuelve producto social y se difunde por los canales comerciales.

Todos estos cambios representan ahorros en esfuerzo físico, en inversión directa de trabajo —aunque su costo pueda (¿excepcionalmente?), requerir mayor tiempo de trabajo remunerado— y responden a una nueva valoración de la clase de satisfactores obteni-

dos. O sea, se someten a los mecanismos generales de socialización que generan condiciones medias de realización en todo tipo de producción y tienden a imponerlas universalmente. El uso máximo del trabajo y de los recursos propios deja de propiciar un abaratamiento de la producción doméstica a partir del momento en que otras formas de obtener satisfactores similares se hacen asequibles y que la fuerza de trabajo familiar puede encontrar otras oportunidades de empleo.

Los servicios públicos aparecen en el entorno de las unidades domésticas como recursos sociales que les plantean nuevas opciones de funcionamiento, conduciéndolas a delegar ciertas funciones que serán asumidas por agentes externos. Unos y otros se entrometen en áreas diversas de la reproducción familiar.

Si en sus inicios la escuela pudo percibirse como competidora en el uso del tiempo de los niños y en su aprendizaje, las generaciones actuales ya la han integrado como un parámetro esencial cuyos ritmos y requerimientos (cuotas, uniformes, juntas de padres de familia, trabajo en la parcela escolar) se imponen a la rutina familiar y comunitaria.

Figuras elusivas o muy presentes, según los lugares, los maestros focalizan una tensión generada por las expectativas que el sistema escolar despierta: presencia efectiva, capacidad pedagógica, mantenimiento de las aulas y hasta preferencias sindicales de los docentes, llegan a ser temas destacados de la vida local y suscitan posiciones encontradas entre un sector amplio de la población que integra a todas las categorías sociales, en especial —cosa importante en los pueblos campesinos— a los vecinos que están fuera de la asamblea ejidal, y a las mujeres.

Las demandas reiteradas de ampliación de mayores grados o ciclos no desconocen el hecho de que los jóvenes escolarizados no tienen en el campo gran oportunidad de aprovechar su formación y se ven alentados a emigrar. Pero nadie duda que “el estudio es necesario para progresar”, aunque la experiencia no siempre lo confirma, y no es raro que familias enteras, o madres e hijos, se trasladen por un tiempo a la cabecera municipal o a una ciudad cercana para asegurar el ingreso a la secundaria o la atención de profesores de mejor nivel.

Aquí, la organización familiar se vuelca al máximo hacia la preparación de una fuerza de trabajo que probará suerte fuera de la agricultura.

Mientras ocupa el tiempo infantil y adolescente, la escuela libera en cierta medida el de las madres, más aún cuando se expande

hacia la educación maternal y el jardín de niños, como empieza a suceder en algunas regiones. Una señal inequívoca de “urbanización” en el modo de vida y en la concepción de los papeles, es encargar a una institución ajena el cuidado y la socialización de los pequeñitos, en vez de descansar su atención en la ayuda familiar o en asumirlos ella misma; esto supone una vinculación femenina creciente con el mercado de trabajo.

La posibilidad de acudir a los servicios públicos de salud también afecta el área de responsabilidad de las familias. A pesar de la insuficiencia o lejanía de los centros de atención médica en muchas zonas,⁸ los programas de planificación familiar y la apertura de canales de acceso al seguro social a través del crédito agrícola han contribuido a divulgar la ideología (y cierta práctica) de un compromiso nacional en la búsqueda de mejores condiciones sanitarias.

En contraste con la privacía e intimidad de los cuidados que los propios familiares o alguna persona entendida proporcionaban a los enfermos dentro de la casa, la atención que se les da empieza a tomar un cariz público, en los dos sentidos de institucional y visible: ya es común la imagen de una madre con su hijo en brazos, aguardando su turno para que la atiendan las trabajadoras sociales encargadas de la campaña de vacunación o el médico en su visita al centro local de salud.

El aprovechamiento de otros servicios públicos (luz, agua, caminos, transporte, etc.), procura un beneficio económico más inmediato, y no parece inmiscuirse tan directamente en el aspecto valorativo del desempeño doméstico, pero es la vida cotidiana la que se va coloreando con otros matices cuando cambian el cómo, cuándo, con (o sin) quién se hacen las cosas.

Desde luego, no es comparable lavar los trastes con agua de la llave que chorreándola de la cubeta, tallar la ropa al borde del río o en el lavadero, mantener limpia la casa después de cocinar con gas o leña. Los tiempos dedicados a cada tarea varían considerablemente así como el esfuerzo físico que requieren. Después de instalarse la luz eléctrica, viene pronto el tiempo de la televisión y de los aparatos domésticos. Cambian el ritmo del día y su duración. El caer de la noche ya no impone de manera tan tajante que cada uno “se recoja” en casa, y pueden prolongarse las actividades y el intercambio social.

⁸ El Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad estima que 14 millones de mexicanos no tienen acceso efectivo a los servicios institucionales de salud. Las deficiencias son mayores en el campo (CCPNS, 1990).

Los espacios del quehacer doméstico se desplazan, unos hacia dentro de la casa y otros hacia afuera; si se acaban las pláticas alrededor del pozo, se reanudarán en la fila del molino, o en el autobús que lleva a la cabecera municipal, donde se hacen las compras.

Cada una de estas variaciones añade su pequeño toque a los nuevos modales de la vida puéblerina. Se acompañan de comportamientos y actitudes en público que reflejan pautas aprendidas en otros ámbitos de socialización: la escuela, la ciudad, el trabajo. Hasta la tradicional segregación de los grupos de jóvenes por sexo se hace menos presente, y ocurre que se reúnan muchachos y muchachas “en bola” a la vuelta de la calle: indicio preciso de influencia urbana. Naturalmente se prefieren los ambientes que estén “más a tono”, y quizá la demanda creciente de banquetas, quioscos y alumbrado público en las plazas de las aldeas no sea ajena a esta búsqueda.

Las ropas expresan el mismo afán de pertenencias más amplias, con la paulatina sustitución del “uniforme” campesino —la camisa masculina de manga larga, el vestido de una sola pieza— por el atuendo asexuado de los jóvenes urbanos del mundo entero: *jeans*, playeras y tenis. En los pueblos del norte del país, la venta de lotes de ropa estadounidense de segunda mano tiene gran éxito.

Particularmente notorio, el proceso de transformación de las viviendas es de los más complejos; indica que los campesinos están compartiendo nuevos criterios valorativos respecto de los modos de disponer su espacio íntimo, organizar la convivencia familiar, guardar sus pertenencias, a la vez que se imponen contingencias ligadas a la disponibilidad y precio relativo de los materiales. En ciertas zonas, el adobe, la teja, los tablones van desapareciendo, pero se consiguen más fácilmente la varilla y el cemento, así como las láminas de cartón enchapopotado o el material de demolición. El estatus social, manifestado a través de la elección de los materiales, el tamaño, tipo y formas de la construcción, se acoge a diversos modelos, variables según las regiones. Aquellas que han conocido cierta prosperidad campesina tienen una tradición constructiva que puede proporcionar modelos prestigiosos de vivienda en la actualidad (Linck y Santana, 1988:156-167), pero tiende a imponerse un modelo más uniforme, cuya “modernidad” se asimila a “urbanidad”, entendida ésta como el mayor grado alcanzable de “artificialidad” o sea de participación de elementos, agentes y criterios externos en su elaboración (Puente, 1988:19).

Más sutilmente, el ordenamiento interior y los usos que se dan a cuartos, rincones, galerías y solar revelan las actividades que aseguran el mantenimiento de la familia, la proveniencia —compra o

cosecha propia— de los alimentos, hábitos de promiscuidad o mayor distanciamiento físico, la organización del trabajo doméstico.

Cada vivienda ilustra, más allá de las evidencias funcionales, cierto proceso de negociación entre las experiencias y preferencias de los individuos. Armoniosa o conflictivamente, las familias interiorizan las influencias y circunstancias externas para elaborar su espacio de convivencia. Allí se desarrollan los aspectos y tiempos más íntimos de su reproducción, y se explican las mediaciones que introducen entre su desempeño productivo y su consumo.

Sin coherencia necesaria, sin unanimidad, a ritmos diferentes pero envueltos en un gran impulso generalizado, los campesinos participan de una transformación de los esquemas productivos y de los modelos de bienestar que implica que ambas esferas de su quehacer, otrora íntimamente vinculadas, se van apartando.

En esta evolución, en momentos sufrida, en otros deseada, van surgiendo nuevas necesidades y expectativas respecto de la intervención del mercado o de los poderes públicos en su satisfacción. Implica que se tiene que acudir a instancias externas, superiores, para obtener de afuera un sustituto o un complemento de lo que, antaño, se procuraba en la intimidad de la unidad doméstica o de la comunidad. Las mujeres, en su papel de puente activo entre producción y consumo, perciben quizá más rápidamente el estiramiento de la distancia material e ideológica que la adopción de los nuevos criterios de calidad de vida introduce entre estas dos funciones.

Las movilizaciones que estas demandas suscitan sacan a la luz las evoluciones y contradicciones existentes en las familias y en las comunidades, y ponen en tensión todo el aparato de instituciones y poderes, ya debilitado por la crisis económica y política, que se ha venido edificando para el control de la población campesina.

Demandas campesinas

La dotación de infraestructura en las áreas rurales siempre se ha realizado con aportaciones de los propios campesinos. Aprovechando las tradiciones del trabajo comunitario, se les hace compensar su insolvencia fiscal con trabajo directo, pues se considera que una inversión pública sin contraparte daría muestras de paternalismo.

La movilización por estas demandas ha sido discreta, limitada a la localidad, oscurecida por las luchas más visibles sobre la tierra u otros objetivos ligados a la producción agrícola. La recesión de estos últimos años y la desatención oficial a las demandas produc-

tivas descubren cierta efervescencia que reina en los pueblos.

Ya no sólo son los productores los que tienen voz; ahora empiezan a reclamar las mujeres, los jóvenes, los vecinados, los que no tienen tierra pero sí derecho de piso, y que piden que se tomen en cuenta estas nuevas necesidades de la vida cotidiana. Se van formando comités —en pro del agua, de la luz, del molino de nixtamál, de una nueva aula, de una cancha deportiva— se organizan bailes, se venden tamales, se gestiona ante las autoridades. Las acciones tienen mucho de espontáneo e informal en un primer momento y la movilización se basa más en el entusiasmo que en la organización.

Las asambleas ejidales y otras organizaciones, esencialmente masculinas, de productores suelen tardar en percatarse y formular estos nuevos reclamos, y no siempre se dan por aludidas. No hay nada extraño en eso, puesto que los portavoces más activos se reclutan entre las categorías sociales que no gozan de un estatus autónomo en el medio rural sino que lo derivan de su relación con el sujeto principal de la producción.

Las formas organizativas que adoptan suelen reflejar esta dependencia en su estructura piramidal inspirada del ejido (con la clásica tríada: presidente, secretario, tesorero) y en la composición del equipo dirigente que frecuentemente reúne a las esposas de quienes detentan el poder ejidal en el mismo periodo. Numerosas UAIM —Unidad agroindustrial de la mujer— presentan también esta estructura que facilita ciertas negociaciones en la localidad pero puede ser un freno grave para la autonomía de los participantes (De Barbieri *et al.*, 1983; Dávila, 1986; Canabal, 1988; Magallón, 1988; Arriaga *et al.*, 1985).

Las mujeres encuentran múltiples dificultades para lograr su cometido. No sólo los objetivos que enarbolan tienden a pasarse por alto cuando se trata de integrarlos al programa de trabajo de una instancia que rebasa el nivel del comité, sino que ellas mismas a menudo dudan de su propia legitimidad o son desairadas por sus compañeros (García de la Rosa, 1990).

Se da el caso, desde luego, que los ejidos y las uniones, aunque no hayan tomado la iniciativa, recojan estas demandas y las lleven adelante; esto es señal de fortaleza, apertura y pugnacidad, pues han de tratar no sólo con interlocutores externos diferentes a las acostumbradas autoridades agrarias, sino con una membresía renovada que puede tener opiniones y reacciones poco predecibles, incluyendo mayores reclamos de democracia interna (Gordillo, 1988a; Fox y Hernández, 1989).

Pero no parece haber gran interés entre las estructuras de más alta jerarquía, como la Central Nacional Campesina, (CNC) u otras centrales, de actuar como refuerzo y caja de resonancia frente a las oficinas gubernamentales correspondientes. Es sintomático que aun las organizaciones independientes como la Coordinadora Plan de Ayala u otros frentes den una prioridad muy baja a la lucha por los servicios en las comunidades, que tienden a considerar como meros puntos tácticos en sus programas (Carbajal, 1988; Canabal, 1988). Por ahora, no caben estas demandas en un enfoque explícitamente sectorial, ni existen, hasta donde sabemos, órganos que las enarbolem más allá del nivel local o microrregional (pero es realmente parca la información periodística y académica al respecto).

Para que estas reivindicaciones, que atañen a necesidades de consumo, rebasen el ámbito de sus beneficiarios potenciales directos y puedan suscitar alianzas, son necesarias las coyunturas regionales (o nacionales) donde un cuestionamiento más global de la manera en que se distribuye el gasto público entre fines y sectores sociales concurrentes las lleve al nivel político.

Proyectos gubernamentales para los campesinos

Los esfuerzos de urbanización que implementan las diversas instancias encargadas de las obras públicas tienen por fuerza alcances mucho más limitados, aunque suscitan estudios, programas y organigramas bastante complejos (planes de desarrollo, sistemas de ciudades) para jerarquizar de manera eficiente la distribución de servicios.

No es reciente la preocupación por dotar al país, y en particular a las ciudades, de infraestructura; éste ha sido tema permanente de los distintos gobiernos (empezando por el de Porfirio Díaz) y es una de las bases que les ha permitido construir un consenso nacional. No en vano se afirma que instalar los servicios esenciales en un territorio funge, para todo poder de Estado, como método privilegiado de control de la población (Raffestin, 1980).

Pero ha habido un giro en la actitud de los gobernantes; esto se puede rastrear en los volúmenes presupuestarios que se dedican a la dotación de servicios a la población rural y urbana, y más aún en el discurso que anuncia, subraya y explica la importancia de esta inversión.

En términos cuantitativos se comprueba un aumento sostenido del gasto en el desarrollo social y en la inversión física desde 1988,

siendo el programa estrella, evidentemente, el conjunto de acciones presentado bajo el lema de Solidaridad.⁹

La justificación que se dio para avalar estos esfuerzos apunta hacia la urgencia de lograr una mayor justicia social que asegure a la población más pobre y marginada el disfrute de un bienestar mínimo (“piso social básico”) para que el país pueda obtener la modernización y el crecimiento deseado. Pero este propósito debe entenderse en su preciso contexto: al abandonar el principio de “organizar la política económica colocando en el centro la justicia social”, preconizado por el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad (1990:68) al que se encargó, en los primeros tiempos, el diseño ideológico y programático de Solidaridad, el presidente Salinas ha subrayado en sus Informes de Gobierno y otros discursos el fundamento ético más que económico que sustenta su combate a la pobreza.

Los graves problemas estructurales que provoca la muy desigual distribución de los ingresos siempre han sido reconocidos por los gobernantes (al menos de dientes para afuera), pero se les intentaba paliar con políticas económicas diseñadas para proporcionar ciertos apoyos a las unidades productivas más débiles. El cambio se sitúa precisamente en el lugar que los dirigentes nacionales le asignan ahora a la lucha contra las desigualdades. Ya no cabe dentro de un manejo económico que, de aquí en adelante, buscará sanear los mecanismos productivos y distributivos contaminados por el proteccionismo, la ineficiencia y la corrupción; tales objetivos requieren, al contrario, que el Estado se retire al máximo de los espacios que el mercado puede (debe) regir.

Para salvar las contradicciones entre las necesidades de la población pobre y la dinámica de acumulación y concentración de riqueza que condiciona el crecimiento económico, se diseña una política especial que se focaliza en el mejoramiento del consumo popular. No interfiere con las fuerzas propias de la economía y se financia, además, con recursos “adicionales” (eminentemente coyunturales en este caso, puesto que provienen en un inicio de un

⁹ Según datos de Nacional Financiera, el gasto en desarrollo social pasa de absorber 32.2% del gasto programable en 1988 a 43.5% en 1991, y la inversión física de 4.1% en 1989 a 7.1% en 1991 (*El mercado de valores*, núm. 21, nov. 1990). El Pronasol aumentó en 45.8% de 1990 a 1991, pasando de 3.2 a 5.1 billones de pesos (“Logros y perspectivas del Programa Nacional de Solidaridad”, *La Jornada*, 24-IV-91). Recibirá 6.8 billones en 1992, logrando un incremento de 19% en términos reales respecto de 1991 (*El Financiero*, 18-XI-91).

préstamo específico del Banco Mundial y de la reorientación de los subsidios que eran destinados a las empresas paraestatales ahora vendidas).

O sea, se delinea un área específica de la acción pública, una política social que rompe con la tradición de los gobiernos anteriores, quienes asignaban a las políticas sectoriales, entre otros buenos deseos, la responsabilidad de ir ampliando hacia los márgenes más pobres de cada sector los beneficios que el núcleo pujante lograba obtener.

La estrategia consiste ahora en identificar precisamente a los más necesitados: la población “vulnerable” o “marginada” de tal o cual zona, y en aportar un respaldo financiero a su propio esfuerzo por alcanzar el servicio que requiere prioritariamente.

El Pronasol encabeza y simboliza esta política social. Los constantes intentos por adecuarlo a las necesidades varias que expresa la población van acentuando notablemente su enfoque coyuntural. A una posición de principio sucede una práctica ecléctica que tiene la ventaja de dar mayor eficacia a cada acción emprendida pero limita seriamente su alcance global.

En un primer momento, sus grandes apartados contemplaban educación, salud, alimentación, vivienda, y apuntaban a categorías genéricas de población (mujeres y niños, jóvenes, indígenas). Se les han ido sumando programas definidos en términos de metas desglosadas y grupos sociales más específicos: campesinos pobres, colonos urbanos, jornaleros, pescadores, cafeticultores. Según las regiones y los municipios se canalizan más recursos hacia un programa u otro y prevalece una gran diversidad en los criterios de elección [¿qué programa(s)?, ¿en qué municipio?], y en su funcionamiento.¹⁰

Sumada a estos factores, se puede establecer una distinción clara entre las acciones referidas a la mejoría de escuelas o de centros de salud, dotación de servicios (agua, electricidad) y construcción de infraestructura urbana (banquetas, cordones, canchas deporti-

¹⁰ El 40% de los fondos Pronasol se canaliza a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Zacatecas (*La Jornada*, 24-IV-91). Los cuatro primeros son los destinatarios del préstamo del Banco Mundial. Respecto de la distribución entre regiones y programas, los funcionarios reconocen que se carece de criterios generales. La capacidad de imposición de este programa sobre proyectos municipales o estatales radica en buena medida sobre el hecho de que la Secretaría de Programación y Presupuesto dispone del Ramo 26 de Egresos que alimenta los Convenios Únicos de Desarrollo celebrados con los estados, y administra el Pronasol. Para el análisis de un caso de competencia entre Solidaridad y los esquemas políticos locales véase Pepin-Lehalleur y Prevót-Schapira, 1992.

vas), por una parte, y el apoyo a los proyectos productivos, por la otra.

Las primeras responden evidentemente a una enorme necesidad, muy desatendida hasta ahora. Sin embargo, el esfuerzo que se lleva a cabo actualmente está presentado como una medida inaudita, un salto adelante, cuando en realidad se reúne bajo un solo membrete no únicamente el presupuesto nuevo sino parte de los programas ordinarios de trabajo de las distintas secretarías federales y de los gobiernos estatales. Vale destacar también que se realiza con una aportación muy fuerte de la población beneficiada: por lo general, 30% del costo entregado de inmediato, antes de iniciar las obras, y 20% más a plazos, por medio de cuotas incluidas en los pagos mensuales de los servicios (financiados, mientras tanto, por el municipio o el gobierno del Estado). Estos cobros han sido revaluados a nivel nacional en el curso del año 1991; o sea, que se proporcionan servicios caros (o en todo caso, no subsidiados).

Aun con estas restricciones y el hecho que se le dé una abusiva proyección partidista al Pronasol, muy criticada por la oposición y por observadores en vísperas de las elecciones legislativas de agosto de 1991, éste cumple con dos funciones fundamentales: empezar a poner a la par del resto de la población a sectores rurales (y urbanos) desfavorecidos en cuanto a condiciones de educación, de salud, de vida cotidiana, y alentar la iniciativa y la organización de los solicitantes.

El programa conocido como Solidaridad para la Producción suscita muchas más dudas. Muy lejos de cumplir el papel estructural que preconizaba el Consejo Consultivo (1990:110-116), el apoyo a proyectos productivos se inició como medida de emergencia para paliar los efectos de la violenta retracción crediticia en 1990. Un virtual cese de funciones por parte de Banrural durante tres ciclos agrícolas, la desaparición de Anagsa (que aseguraba los préstamos), el descargo de muchas funciones de fomento o regulación que asumía el Estado en el campo, han impuesto la idea de que el deslinde entre los agricultores con capacidad productiva y acumulativa y los demás no es simple efecto derivado de las políticas de ajuste macroeconómico, sino un elemento específico del reordenamiento agrícola.

En 1990, el Programa Solidaridad para la Producción atendió a agricultores de zonas de alta siniestralidad caídos en cartera vencida, prestándoles sin intereses lo indispensable para sembrar con baja tecnología tres o cuatro hectáreas de básicos: lo que podía aparecer entonces como una ayuda eventual para el consumo familiar

o en el mejor de los casos como un crédito-puente se inscribe ahora en la continuidad.

En el nuevo dispositivo que el gobierno instala en estas fechas [enero de 1992] para acompañar y amainar los trastornos que los cambios ya aprobados al artículo 27 constitucional deben acarrear, los Fondos Solidaridad para la Producción juegan varios papeles. Refugio de los campesinos que no pueden abrigar esperanzas de volverse algún día productivos, acogen además a los que han contraído deudas insolubles y que responderán por sus compromisos con el trabajo de sus brazos. Y se crea un programa más, dotado de 500 000 millones de pesos, para el fomento de microempresas no agrícolas que ayudarán al desarrollo de actividades "informales" (quizá femeninas) en el medio rural.

De esta manera, los dos grandes rubros producción y bienestar del Programa Solidaridad se suman para ofrecer *la otra cara*, compensatoria e inseparable de la política de exclusión económica de los agentes "ineficientes".

Si en años próximos adviene un campo en el que la forma ejidal deje (tendencialmente) de definir el modo de ocupación y uso del suelo, estos programas aparecerán como instrumentos poderosos de otro posible diseño territorial. Conforme se debilita el arraigo comunitario y se desbaratan núcleos ejidales, uno puede imaginar una mayor concentración habitacional en "ciudades rurales" donde la urbanización resulte más económica.¹¹ Fuera de las regiones de producción agrícola eficiente, su destino podría ser, según los casos, convertirse en zonas-dormitorio o atraer industrias y empresas productoras de servicios.

Según esta perspectiva, una gran parte de los campesinos compartiría la suerte de los que anteriormente se designaban como integrantes del "sector informal" y que ahora son llamados "los pobres de la ciudad".

Esta reubicación social, inscrita en el proyecto de sociedad que el equipo gobernante busca implementar, permite que se abran, a la vez que cierran, espacios de movilización social para los habitantes del campo.

¹¹ Esta formulación aparece en una entrevista concedida por Eduardo Escárcega, subdirector del Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México (CEHAM) a *La Jornada*, 19-IV-91. Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone igualmente una "profunda reestructuración del campo que permita arraigar a los campesinos, no sólo en actividades agropecuarias sino mediante un mayor empleo en la industria y el comercio en áreas rurales" (*La Jornada*, 15-III-91).

Los cambios y sus ritmos

El nuevo marco jurídico que se está imponiendo al campo actualmente violenta y acelera el ritmo de las tensiones, los conflictos y reacomodos donde la sociedad campesina va elaborando las formas de su continua diferenciación.

Para muchos, hace tiempo que la capacidad de producción propia ha dejado de ser el rasero de la reproducción familiar y el criterio principal de la posición social. Al lado del "productor", actor y representante de los *intereses unánimes* de su unidad familiar, se perfilan otros sujetos que cobran existencia social a partir del distanciamiento entre producción y consumo.

Las mujeres, los jóvenes, los mismos productores con recursos insuficientes, ejercen su fuerza de trabajo fuera del ámbito de su inmediato aprovechamiento por la familia, y profundizan la necesidad que está teniendo de encontrar en el mercado los elementos de su consumo y los ingresos que permitan adquirirlos. Conforme surgen alternativas al trabajo doméstico para la obtención de ciertos bienes, la producción de satisfactores y su realización en el consumo se diferencian dentro de la unidad familiar, y los(as) trabajadores(as) domésticos(as) acceden a una mayor individuación.

El proceso no desemboca en nada ineluctable ni automático; puede traducirse en mayor autonomía personal en la medida en que también se transformen las áreas y los canales de reconocimiento social en la comunidad. Parte de la lucha de los campesinos y campesinas apunta entonces a la renovación de los ámbitos y mecanismos de consenso dentro de sus comunidades, y al reconocimiento de las categorías de individuos subordinados en su nuevo papel de actores.

La movilización por nuevos recursos colectivos, de índole no agrícola, amplía el horizonte de la interacción a nivel local y ofrece posibles espacios de acción a nuevos sujetos.

Cuando el ejido, u otra modalidad de agrupación de los productores constituían la única instancia legítima de representación campesina, era frecuente que se excluyera de la tramitación de las demandas —aún las no-productivas—, a todos los que no eran titulares del derecho agrario. Ahora, los canales de Pronasol buscan eludir las organizaciones ya existentes de productores y fomentan la creación de comités *ad hoc* que dan una resonancia nueva a los esfuerzos emprendidos a nivel de vecindario o de localidad. El énfasis que se da a la territorialidad en el diseño del Programa Solidaridad podría ser aprovechado por la población rural para orga-

nizarse según estas nuevas líneas y buscar mayor presencia a nivel municipal, instancia operativa del programa y primera entidad política.

Pero el ritmo se ha acelerado, pues este proceso paulatino de acercamiento campesino a las condiciones de vida de las clases populares urbanas ha entrado en repentina confluencia con un replanteamiento de la problemática agraria a través de la decisión gubernamental de proponer a la Cámara la cancelación definitiva del reparto y la apertura de la tenencia ejidal a una relación mercantil.

Las modificaciones a la ley irrumpen en el seno de cada familia campesina, de cada comunidad ejidal con fuerza catártica, dando carácter de urgencia a decisiones respecto del derecho agrario que anteriormente podían meditar-se durante años o ni siquiera tomarse conscientemente, dejándolas a la tradición. Cuestiones insospechadas se plantean cuando cabe la duda sobre quién tiene el poder más legítimo de decisión: ¿el ejidatario o su familia? ¿La asamblea ejidal (con o sin delegados agrarios), el comisariado ejidal o el conjunto de la población, incluidos los vecinos?

De la capacidad de los campesinos de movilizar sus propias comunidades sobre nuevas bases e involucrar a otros sectores sociales, o sea de transformar sus demandas en una acción política, depende que su acercamiento a las condiciones de vida de las clases populares urbanas no signifiquen su absorción en una gran categoría de "pobres" objetos de la acción asistencial del Estado.

No sin lucha serán reconocidos sus derechos como trabajadores y ciudadanos de acceder a condiciones "normales" de consumo.

Recibido en junio de 1991
Revisado en febrero de 1992

Correspondencia: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos/Camino al Ajusco 20, Col. Pedregal de Santa Teresa/CP 01000 México, D.F.